

C.A. de Santiago

Santiago, siete de abril de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Claudio Quiroga Hinojosa, abogado, en favor de doña **Fanny Mireya Roa**, Pasaporte N° 163724214, y de don **Telmo Pérez Lamus**, Pasaporte N° 164350539, ambos de nacionalidad venezolana, todos con domicilio en Huérfanos N° 1117, oficina N° 510, comuna de Santiago, quien interpone acción de amparo en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por haber incurrido éste en un acto ilegal al no acoger a trámite la solicitud de visa de turismo de los amparados, lo que vulnera su libertad personal.

Solicita que se acoja su acción y se ordene a la recurrida revertir su decisión y se ordene al Consulado General de Chile en Venezuela que continúe con el procedimiento para hacer entrega de la visa consular de los amparados a fin que puedan viajar a Chile y reunirse con su hija, en el menor tiempo posible.

Fundando su recurso indica que los amparados son los padres de donña Angélica Pérez Roa, venezolana, quien reside actualmente en Chile, con visa temporaria sujeta a contrato. Afirman que atendida la crisis humanitaria vivida en Venezuela y en busca de mejores condiciones de vida, los amparados iniciaron el trámite de visa de turismo el 16 de enero del 2022, cumpliendo todos los requisitos y documentos solicitados, las que fueron admitidas a tramitación.

No obstante, indican que el 07 de febrero pasado, ambas solicitudes fueron cerradas, quedando como constancia de ello en la modificación realizada en el estado de solicitud por medio del Sistema de Atención Consular (SAC), sin que los amparados hayan recibido correo electrónico alguno en que se les informara la razón de ello.

En primer lugar, alega que el actuar de la recurrida vulnera los artículos 3 4, 11 y 41 de la Ley N° 19.880, al haberse emitido una decisión carente de toda justificación de hecho y derecho, ya que los amparados han cumplido con la todos los requisitos y han acompañado toda la documentación solicitada.

En segundo término, esgrime que la causal que invoca la autoridad para cerrar sus peticiones, es improcedente, ya que los amparados siguieron todas las instrucciones y procedimientos que el Estado de Chile impuso a todo inmigrante que quiera venir a Chile por turismo.

Adiciona que se infringe el principio de la buena fe, que gobiernan nuestro ordenamiento jurídico.



Como tercera cuestión, alega que se vulnera el principio de la unidad de la familiar, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, y en los artículos 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme a los cuales la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

Manifiesta que se ha vulnerado la libertad personal de los amparados, toda vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el acto ilegal, les negó la posibilidad de hacer ingreso al país a través de los mecanismos establecidos por la propia autoridad, pese a cumplir con todos los requisitos para el otorgamiento de los visados y el posterior ingreso.

SEGUNDO: Que informa el Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de chilenos en el Exterior, solicitando el rechazo de la acción.

Sostiene que los amparados presentaron una petición de solicitud de Visto de Turismo Simple (hoy denominada Visa de Permanencia Transitoria) el 16 de enero de 2022, ante el Consulado General de Chile en Caracas, Venezuela, bajo la vigencia de la antigua legislación migratoria, a saber el Decreto Ley N° 1.094, de 1975 y el Decreto N° 172, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1977.

Indica que conforme lo dispone el artículo 44 del Decreto Ley N° 1094 el visto de Turismo permite a los extranjeros permanecer por hasta 90 días en el territorio nacional (prorrogable por igual período), prohibiéndoles expresamente desarrollar actividades remuneradas, salvo casos calificados, autorizados por el Ministerio del Interior. Señala que los requisitos requeridos para ello, se encuentran informados en la página web <https://serviciosconsulares.cl/tramites/visto-de-turismo>, entre ellos, los que den cuenta de la solvencia económica propia.

En primer lugar, alega que los amparados no acompañaron todos los documentos requeridos por la autoridad migratoria para el otorgamiento del Visto de Turismo, en específico no acompañaron documentos que acreditaran de forma concreta la solvencia económica propia necesaria para poder conceder el Visto de Turismo, careciendo de solvencia financiera para poder costear su viaje y estadía sin constituir carga social como lo exige la ley y la autoridad migratoria, por lo que su visa no fue acogida a trámite.

Añade, que acorde al relato de los amparados en la presente acción constitucional la solicitud tenía un claro propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas, lo que no es posible con el Visto de Turismo solicitado.



Atendido ello, concluye que no existe ningún acto por su parte que pueda ser calificada de arbitraria o ilegal por cuanto son los actores quienes no han cumplido con sus obligaciones legales y administrativas, como el de adjuntar documentos fundantes de su solicitud, no siendo ello imputable a su parte..

En segundo término, esgrime que el derecho alegado por los recurrentes no es indubitado, pues el hecho de presentar la solicitud de Visa, el recurrente o por quien actúa en su favor no adquiere el derecho a obtener la misma, sino que debe cumplir con ciertas condiciones objetivas que dispone la normativa en la materia.

Finalmente afirma que la acción de amparo no es procedente, por no encontrarse los amparados en las hipótesis previstas en el artículo 21 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que el recurso de amparo, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional que tiene por objeto resguardar la libertad personal o seguridad individual de las personas, frente acciones u omisiones ilegales que priven, restrinjan o perturben las garantías constitucionales mencionadas.

CUARTO: Que el acto que los amparados califican de ilegal consiste en la decisión de la recurrida de no acoger a trámite la solicitud de visa de turismo, sin otorgarle fundamento alguno para ello.

QUINTO: Que se debe tener presente al respecto que la normativa que regula la materia, vigente al momento de la solicitud de los amparados, se encuentra regulada en el Decreto Ley N° 1094, que regula la ley de Extranjería.

Dispone su artículo 91 que son atribuciones del Ministerio del Interior y del Departamento de Extranjería y Migración “1.- *Proponer la política nacional migratoria o de extranjeros con informe de los organismos que tengan injerencia en cada caso; 2.- Supervigilar el cumplimiento de la legislación de extranjería y proponer su modificación o complementación y aplicar, a través del Departamento de Extranjería y Migración, las disposiciones del presente decreto ley y su reglamento*”; y la de “9.- *Impartir instrucciones para la mejor aplicación de este decreto ley*”. En igual sentido lo dispone el artículo 177 del Decreto N° 597 que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Agrega su artículo 44 que “*Considéranse turistas los extranjeros que ingresen al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas.*



Todo turista deberá tener los medios económicos suficientes para subsistir durante su permanencia en Chile, circunstancia que deberá acreditar cuando lo estime necesario la autoridad policial.

Los turistas podrán permanecer en el país hasta por un plazo de 90 días, prorrogable por un período igual en la forma que determine el reglamento.

En casos excepcionales, cuando se aleguen y prueben motivos de fuerza mayor, se podrá conceder una segunda prórroga por el tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país”.

SEXTO: Que de conformidad al marco regulatorio antes señalado, correspondía a los amparados acompañar los antecedentes que permitieran a la autoridad recurrida resolver adecuadamente su petición, en el caso, aquellos que acreditaran de forma concreta la solvencia económica, tal como exige el citado artículo 44, los que no fueron acompañados por éstos, quienes no han aportado a esta Corte documento que diera cuenta del cumplimiento de dicha exigencia.

No puede soslayarse, además, que la visación requerida por las amparadas, según se afirma en la acción que dio origen a estos autos, no se dirige a la obtención de una visa de turismo, sino a obtener la venia de ingreso al territorio nacional y subsecuente migración con otros fines. De consiguiente, no se trata llanamente del caso en que la solicitud de iniciación no reúna los requisitos legales, sino de un supuesto diverso, esto es, de una petición completamente ajena al visado que se impetró, la que debió encausarse por los administrados a través del acto formal de postulación correspondiente a un régimen diverso; circunstancia que deriva en que, en los términos en que se formuló, la petición adolece de deficiencias insubsanables.

SÉPTIMO: Que así, solo cabe desechar la existencia de un acto ilegal, por cuanto el actuar de la autoridad recurrida se ajustó al marco regulatorio legal para las solicitudes y tramitación de visas de turismo de los amparados, quien ha obrado dentro del ámbito de sus competencias en su función de regular la política migratoria del país y de supervigilar el cumplimiento de la normativa migratoria, dictando una decisión fundada en la falta de los requisitos para su otorgamiento y por no acompañar los amparados un documento que les era requerido por la ley.

OCTAVO: Que, en estas condiciones, se evidencia que la resolución impugnada por la presente acción constitucional fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales, con estricto apego a la Constitución y las leyes, no advirtiéndose, por tanto, acto ilegal alguno de parte de la autoridad recurrida que prive, perturbe o amenace su derecho a la libertad personal y seguridad individual de los amparados.



Por estas consideraciones y teniendo presente, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la Republica y en el auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de amparo, **SE RECHAZA**, el recurso de amparo deducido en favor de doña **Fanny Mireya Roa** y de don **Telmo Pérez Lamus**, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Amparo-906-2022.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P., Paola Danai Hasbun M. y Ministro Suplente Rodrigo Ignacio Carvajal S. Santiago, siete de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a siete de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

